

El debate sobre el euro y la soberanía económica: ¿salir del euro sin salir del capitalismo?

Joaquín Arriola Palomares

RUPTURA

Grupo de análisis y creación para la transformación social

Edita:

© 2016 Ruptura. Grupo de análisis y creación para la transformación social.

<http://gruporuptura.org/>

Contenidos

1. Introducción	1
2. Ajustes y compras de títulos de deuda	2
3. Cambiar de moneda es cambiar de mercado	5
4. Nacionalizar la banca	9
5. Poner los trabajadores a trabajar	11

1. Introducción

La crisis financiera en la Eurozona refleja una configuración institucional particularmente expuesta ante las crisis. Los trabajadores en los países del euro padecen las consecuencias de la crisis estructural del capitalismo, incapaz de lograr mejoras significativas de la productividad a pesar de la importante revolución tecnológica que se está produciendo. Pero además de esta crisis, común a todos los países capitalistas desarrollados, la Eurozona se ve especialmente castigada por un sistema monetario y financiero especial, que agudiza las tensiones y amplifica el impacto de las crisis, sean cíclicas o estructurales.

Muchos economistas post-capitalistas, en particular norteamericanos, avisaron hace años que la moneda única cubría bajo la misma moneda y la misma política monetaria a formaciones sociales muy dispares, que en ausencia de mecanismos fiscales de compensación, bajo la misma moneda agudizarían las disparidades hasta hacer estallar las contradicciones de un modelo monetario mal diseñado, incluso bajo parámetros capitalistas. Estos presagios de gente como Krugman, Dornbush, Modigliani, Becker etcétera, parecen haberse confirmado en la coyuntura financiera de la crisis estructural.

Al aplicar la misma moneda a países en los que la acumulación de capital se basa en la exportación y a países estructuralmente importadores, la política monetaria es incapaz de conciliar las necesidades de unos (que precisan una moneda estable para permitir la acumulación a largo plazo basada en las exportaciones) y otros (que requieren de devaluaciones periódicas para facilitar el ajuste externo). Al final, la política aplicada defenderá los intereses de los más fuertes, en este caso los países exportadores de Europa central, frente a los débiles países europeos de la periferia mediterránea. Desde que se puso en marcha la moneda única, entre 2000 y 2011, los países centrales han tenido un saldo comercial medio equivalente al 3,2% de su PIB -frente a un 1,7% en la década anterior-, mientras que los países periféricos han experimentado un

déficit comercial del 1,7% del PIB al año, frente a un superávit del 0.6% del PIB en la década anterior al euro.

La unificación de la política monetaria aparejada a la puesta en marcha del euro ha servido para reforzar el patrón exportador de los países centrales de la Eurozona, y para debilitar la posición comercial y subordinar la dinámica de acumulación en los países periféricos del Mediterráneo a la división del trabajo impuesta desde el centro, donde Portugal, Italia, España y Grecia se convierten cada vez más en reservas agrícolas y de servicios turísticos y residenciales, sometidos a procesos de desindustrialización más o menos acelerados. Por lo tanto, no puede haber salida a la crisis que no perjudique aún más a los trabajadores sin modificar las reglas del sistema monetario y financiero vigente.

La política de la austeridad no es una solución, porque como señalan muchos analistas, la reducción de la inversión reduce la acumulación a largo plazo, y la reducción del consumo público restringe la demanda global y por tanto el crecimiento a corto plazo, de forma que el aumento del desempleo y el cierre de empresas reduce la base fiscal y el problema del déficit, lejos de corregirse, se agrava. La política del ajuste tan solo persigue resolver el problema de solvencia en el que ha caído la banca europea, mediante una transferencia masiva de rentas desde los trabajadores al capital, por vía directa -ataque contra las condiciones de trabajo y salario- y por vía indirecta -reducción de las transferencias sociales-.

2. Ajustes y compras de títulos de deuda

Los gobiernos de la Eurozona han decidido que el Banco Central Europeo (BCE) pueda comprar sin límites cuantitativos previos, títulos de deuda pública en los mercados secundarios (donde los que la compraron en primera instancia la venden para conseguir liquidez), a fin de ayudar a reducir el diferencial de precios

en la deuda de los países de la eurozona. La decisión del BCE, a diferencia de lo que están haciendo los bancos centrales de Estados Unidos o de Gran Bretaña, establece que la deuda adquirida no se financiará con emisión de dinero y se limitará a la sustitución de unos títulos (ventas) por otros (compras) en el balance del BCE. Esto significa que frenar la inflación potencial es una prioridad en la política del BCE, aunque sea a costa mantener el desempleo actual. En realidad, la decisión del BCE de hacer compras en el mercado secundario de deuda pública facilita el relanzamiento de un mercado privado de obtención de liquidez que estaba casi paralizado, por tanto representa una ayuda a la banca y otros grandes operadores financieros tanto o más que a los estados.

Además se ha acordado crear un fondo financiero de estabilización, destinado exclusivamente a gestionar los desequilibrios presupuestarios y garantizar el pago del servicio de la deuda pública a los banqueros y otros rentistas. El establecimiento de una política de transferencias fiscales está fuera de discusión, porque supondría cambiar los objetivos estratégicos para los cuales se creó el euro, es decir, profundizar la división capitalista del trabajo en el espacio europeo, y reforzar el mercado interno al servicio de la concentración y centralización del capital de las multinacionales de los países centrales. Las divergencias de tipos de interés de la deuda soberana son una incongruencia en un espacio económico que presume de ser un mercado único, incluso reforzado respecto a los otros socios de la Unión Europea. La enorme diferencia de precios del dinero (y el crédito) entre los países de la Eurozona, una de las principales asimetrías de la arquitectura financiera y monetaria de un mercado en el que España con una deuda pública de 800 millones de euros, tiene que pagar cerca de 50 mil millones en intereses, y Alemania, con una deuda de más de dos billones, paga menos de 30 mil millones de euros en intereses. Obviamente, los más beneficiados por estas asimetrías de precios, Alemania, Finlandia, Luxemburgo y Holanda, se han resistido hasta ahora, en una batalla política de gabinete cuyos perfiles concretos quedan un tanto desdibujados en la opinión pública y publicada.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) no va a ser capaz de estabilizar las finanzas europeas, y mucho menos de reequilibrar las diferencias estructurales

entre centro y periferia del área monetaria. El MEDE emitirá sus propios títulos, garantizados por el capital suscrito por los estados de la eurozona, y con lo recaudado financiará directamente a los gobiernos mediante créditos y compras de títulos de deuda en el mercado primario. Se pretende captar en el mercado la financiación requerida para los rescates de gobiernos y bancos, por importe de 500.000 millones de euros, los 700 mil millones de capital suscrito por los gobiernos (de los cuales solo tienen que desembolsar 80 mil millones) como garantía. El problema es que el coste social de financiar el gasto público por medio del capital privado es muy superior al que supondría por ejemplo monetizar la deuda. Acabar con el dominio del capital financiero es la solución real, alternativa que los políticos comunitarios se niegan a considerar ni siquiera como una posibilidad real.

Pero los desequilibrios financiero no son solamente un problema vinculado al signo monetario. La idea de abandonar la Unión Monetaria Europea y regresar a las monedas nacionales del pasado tampoco es una alternativa para los países de la periferia europea mediterránea, por cuanto la debilidad extrema de una eventuales monedas nacionales frente al capital financiero global no permitiría una regulación eficaz del ciclo y del cambio estructural en estos países. Conviene recordar que el Sistema Monetario Europeo que pretendía dar estabilidad a las monedas europeas frente a la inestabilidad promovida por estados Unidos con el sistema de tipos de cambio de mercado (origen de la globalización financiera) sucumbió en 1993 por la incapacidad de los Bancos Centrales del sistema de contrarrestar los masivos movimientos de capital especulativo en los mercados de divisas.

Los países de la periferia europea necesitan un sistema monetario y financiero alternativo al euro y a la globalización. Pero no se puede concebir un sistema de ese tipo en el marco del mercado único neoliberal tal como está constitucionalizado en los Tratados europeos. Las reglas de funcionamiento de dicho mercado impiden una solución que aporte estabilidad al proceso de acumulación, al menos en el sentido en que se entiende la "estabilidad" bajo el capitalismo, esto es, un periodo relativamente largo de crecimiento en el que se encadenan ciclos sucesivos de expansión y contracción económica. Algo muy

diferente al largo periodo secular de estancamiento que atraviesan las economías capitalistas desarrolladas, incapaces de intensificar la productividad del trabajo.

3. Cambiar de moneda es cambiar de mercado

Por eso, la alternativa monetaria y financiera tiene que insertarse en una propuesta de integración económica y social diferente a la que suponen la Unión Económica y Monetaria y el mercado único. La moneda es la expresión general del valor, y la unidad monetaria equivale a una determinada fracción del trabajo abstracto o trabajo social de una formación social específica. La creación de euro se vio acompañada de una profundización del mercado único y de la división europea del trabajo, avanzando en la conformación de una formación social de escala europea –actualmente la cuarta parte del PIB de los países de la Eurozona se valoriza por medio del mercado común y la especialización sectorial intraeuropea se encuentra en la base de la desindustrialización acelerada de la periferia de la zona. Aunque este proceso no se ha completado, y por ello la fragmentación monetaria de la Eurozona es una posibilidad real, lo que no lo es volver a signos monetarios nacionales que lejos de representar una soberanía (monetaria) recuperada, no podrían dejar de ser signos monetarios de territorios política y económicamente fragmentados y dependientes del área de influencia del capital europeo.

Si los países de la periferia europea quieren retomar el control sobre su actividad productiva, esto solo lo pueden hacer de forma conjunta y mediante un proceso de ruptura con el modelo de finanzas privadas y espacio monetario asimétrico vigente. La salida del euro es una opción política, más que económica y puede ser un paso hacia la solución de los graves desequilibrios estructurales de las economías periféricas, que no son los desequilibrios financieros sino los

productivos: una base industrial en declive, un despilfarro enorme de fuerza de trabajo, una concentración escandalosa de la riqueza y del patrimonio. Pero como desafío político, supera el grado de autonomía de decisión de cualquier país adversamente afectado por la política que subyace al pacto por el euro.

La salida de la zona del euro debería desarrollarse de forma concertada, en primer lugar entre los países de la periferia mediterránea tiene cuatro momentos íntimamente vinculados, sin cuyo concurso el proceso puede resultar un fracaso. Estos son, i) el establecimiento de un signo monetario común a la Europa mediterránea; ii) la redenominación de la deuda en la nueva moneda del área periférica al tipo de cambio oficial que se establezca; iii) el repudio de una parte de la deuda y la exigencia de la renegociación de la misma; y iv) la nacionalización de los bancos y la regulación estricta (incluida la prohibición temporal) de la salida de capitales. Todos estos elementos se deben dar de forma simultánea, para evitar la descapitalización de la región periférica y para lograr un control adecuado sobre los recursos disponibles para la inversión.¹

Sustituir la moneda es una operación compleja que no tiene solo implicaciones monetarias. No se puede plantear el regreso al escudo, la lira o el dracma, porque la propia existencia del euro ha dado lugar a una evolución en el sistema monetario internacional y a una integración productiva de las economías nacionales. Solo en condiciones de una fuerte autarquía es pensable que una economía nacional europea sea viable. Pero no está garantizado, ni mucho menos, que en esas condiciones la calidad de vida de la población pueda aumentar rápidamente. Una moneda propia en el seno del sistema monetario europeo, algo que propugnan algunos analistas para países como Grecia, o para el resto de países de la eurozona con altos niveles de desequilibrio fiscal, tampoco permite la autonomía de política monetaria para implementar una política alternativa, porque la moneda, al igual que ocurre con la del resto de países de la UE que no forman parte de la UEM, seguiría sujeta a los criterios neoliberales y pro-finanzas privadas del Banco Central Europeo.

¹Una respuesta similar es la que defienden Costas Lapavitsas y el grupo Research on Money and Finances en "*Eurozone Crisis: beggar thyself and thy neighbour*", marzo 2010 y en "*The Eurozone between austerity and default*", septiembre 2010, accesibles en www.researchonmoneyandfinance.org. Ver Costas Lapavitsas: *Crisis in the Eurozone*, Verso, Londres 2012.

Proponer una nueva moneda para países con estructuras productivas más o menos similares sería la única alternativa viable, que permitiría tanto mantener un margen de negociación con las instituciones comunitarias y el Banco Central Europeo, como establecer un bloque político-institucional favorable a un modelo de acumulación favorable a los trabajadores. La nueva moneda común puede negociarse dentro o fuera de la UE, lo a su vez permite una gestión más ordenada de la transición productiva, sin tener que gestionar al mismo tiempo la ruptura monetaria, la del mercado único y la de los flujos financieros.

Cambiar la moneda en países con desequilibrios fiscales agudos lleva implícita una devaluación casi inmediata, lo cual supone un deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios y un reforzamiento del peso de la deuda denominada en euros o en divisas. El cambio de moneda no es en sí mismo ningún avance en la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores, sino todo lo contrario. Por eso, el cambio de moneda requiere que al mismo tiempo -aquí no caben dilaciones- se redenomine la deuda externa e interna en la nueva moneda, al tipo de cambio que los gobiernos consideren más apropiado, y se repudie una parte sustancial de las deudas, infligiendo así un coste elevado a la clase de los rentistas. La reevaluación de la deuda, con el repudio parcial y la renegociación es otro elemento necesario para reducir el lastre de la deuda pasada sobre la financiación del plan de expansión futuro. Este proceso se tiene que aplicar con rapidez, por cuanto reducir la carga de la deuda es condición necesaria para iniciar el proceso de creación masiva de empleos sociales. Por supuesto, esto representa otra fuente de tensión política con los acreedores, en particular en el seno de la propia UE, dado que los agentes financieros europeos son propietarios de la mayor parte de la deuda de la periferia mediterránea.

Las restricciones establecidas en los tratados de la UE, desde el Acta Única y el Tratado de Ámsterdam hasta el Tratado de Lisboa, situando a la propiedad privada y a los criterios de mercado por encima de las decisiones colectivas de los ciudadanos y los estados, hacen muy difícil compaginar una política alternativa basada en la gestión social de los recursos con los principios de libre competencia y gestión privada. Un Banco central sujeto a escrutinio público y a las directrices democráticas de los representantes de los ciudadanos tampoco

es compatible con los Tratados vigentes. Por lo tanto, una moneda para la periferia europea como la que se propone chocará inevitablemente con los planteamientos vigentes en materia de integración europea.

Pero no existe un procedimiento establecido para salir de la UE, y eso puede facilitar que la propuesta de una nueva moneda para una gestión alternativa de la economía y de la política, planteada en el interior de la UE, abra espacios para avanzar una planteamiento reformista, contrario al neoliberalismo y al ajuste imperantes. Hay que tener en cuenta que la población de los países periféricos de la UE ve mayoritariamente de forma positiva la contribución efectiva de la UE al desarrollo institucional y de infraestructuras en regiones de menor desarrollo relativo (fondos estructurales) o la política agraria común (PAC), la más exitosa por estar basada precisamente en criterios ajenos a los del mercado -aunque también en los últimos años la PAC está sometida a un proceso liberalizador. Del mismo modo que países con sistemas sociales tan diferentes como Gran Bretaña, Dinamarca o Suecia pueden permanecer en el seno de la UE pero fuera de la Eurozona, también resultará muy difícil frenar un bloque de países que pretendan realizar una política de socialización de los recursos productivos básicos y de inversión.

Plantear la salida de la Eurozona sin salir de la UE puede ser un procedimiento útil para ofrecer a los trabajadores de los países centrales una salida al desastre que supone la Europa neoliberal (cambiar las políticas exige cambiar las reglas de la propia UE), y puede servir también para limitar el impacto de la probable reacción del capital y sus representantes políticos, que se puede ver favorecida en caso de una salida voluntaria y un aislamiento económico y político de los países de la periferia de la Eurozona. Por razones tácticas parece por lo tanto conveniente separar la decisión de poner en marcha otra moneda para una política favorable a los trabajadores, de la decisión de abandonar la UE, que en todo caso sería la opción si el ataque del capital y de las instituciones comunitarias al proyecto alternativo hace inviable mantenerse dentro del mercado común.²

² Esta propuesta está recogida en: L. Vasapollo, R. Martufi y J. Arriola: *Il risveglio dei Maiali*. Jaca Book, Milán, 2012 (2ª ed.).

4. Nacionalizar la banca

La nacionalización de la banca es la parte más importante del proceso general de des-financiarización de la economía global, y en tanto no se lleve a cabo, el deterioro de la calidad de vida y de trabajo seguirá siendo la receta para mejorar la tasa de beneficios. Tras casi dos décadas de una distribución del valor cada vez más favorable al capital, y con los criterios contables impuestos por Estados Unidos a escala internacional, que obligan a valorar las empresas y sus activos por su precio de mercado, la regulación de la economía capitalista está dejando de ser realizada desde el Estado y las empresas productivas, para estar cada vez más en manos del capital financiero, donde se concentra un volumen creciente de capital en espera de ser asignado a usos productivos. Al reclamar el capital financiero el sostenimiento e incluso la ampliación de las tasas de rentabilidad, la tasa de interés domina cada vez más la tasa de beneficios, presionando a la contracción salarial para contrarrestar la pérdida de eficacia del capital productivo, sometido a bajas tasas de productividad, y por tanto, a rendimientos marginales cada vez menores.

Romper el nudo del capital financiero significa nacionalizar las decisiones de inversión, para favorecer las actividades socialmente útiles, bajo el criterio de rentabilidad social y ecológica, que son criterios de medio y largo plazo. El control social de las inversiones es imprescindible para dinamizar la actividad productiva, y la orientación del crédito en función de obtener el máximo crecimiento del empleo y de los beneficios sociales es muy distinta a la que aplica la banca privada, orientada por el criterio del máximo beneficio a corto plazo. La nacionalización de la banca en situación de insolvencia y dependiente de las ayudas públicas es también un requisito para evitar la fuga de capitales y para eliminar la perniciosa "tradicición" capitalista de privatizar beneficios y socializar pérdidas.

Una parte de la deuda pública es el resultado de las actuaciones de los gobiernos para apoyar a los capitales locales fuertemente endeudados, en

primer lugar la banca pero también las empresas (a principios de 2011, de los 4,7 billones de euros de deuda externa de Portugal, España, Italia y Grecia, un 32% era deuda gubernamental, 4% de las autoridades monetarias, 38% de los bancos, 17% de otros sectores empresariales y 8% deudas generadas al interior de los grupos multinacionales). Este intento fallido de estabilización llevado a cabo por los gobiernos con los recursos de todos los ciudadanos tiene que tener una compensación. La nacionalización de los sectores estratégicos de las comunicaciones, energía y transporte no solo puede ser un precio justo, sino que además aportará los recursos para poner en marcha una estrategia de relanzamiento productivo a corto plazo que permita crear las condiciones para que los millones de desempleados en los países de la periferia europea mediterránea comiencen a producir riqueza social a la mayor brevedad posible. Estos sectores estratégicos son las actividades productivas que están obteniendo mayores beneficios, como resultado de gestionar recursos naturales no renovables sobre la base de una masiva socialización de costes que no computan como costes internos (agotamiento de recursos, contaminación...) o bien porque se están beneficiando de una privatización de redes de comunicación y tecnologías la mayor parte de las cuales se desarrollaron con recursos públicos. Su nacionalización deberá permitir derivar parte de los beneficios hacia usos sociales, así como una reducción drástica y una ampliación masiva en el acceso a los sistemas de comunicación y energía, en particular para los sectores más pobres de la población local y también de los países aliados en el desarrollo de una nueva estrategia de desarrollo global. También es importante que el cambio del sistema monetario-financiero sea una respuesta conjunta, pues el peso que tiene la periferia europea mediterránea es muy superior a la de los países por separado, y su capacidad de resistencia y negociación es mucho mayor de forma conjunta. La deuda externa pública y privada de estos cuatro países es un 23% de la deuda externa de la UEM16: 2,1% Portugal, 2,2% Grecia, 9,1% España y 9,7% Italia.³

³ Datos de deuda externa, primer trimestre de 2011. <http://www.jedh.org>

5. Poner los trabajadores a trabajar

Lo que necesitan las economías periféricas europeas para salir del marasmo es una política de creación masiva de empleos. Las enormes necesidades sociales no cubiertas -de vivienda, de atención a personas dependientes, de servicios sociales de proximidad, de salud y educación, de gestión y cuidado del medio ambiente... pueden ser cubiertas con un programa sostenido en el tiempo de formación y creación de empleo. Pero el mercado es incapaz de suministrar los servicios que se necesitan para mejorar significativamente el bienestar de la población. Se requiere invertir el flujo de recursos, desde el capital hacia el estado y la sociedad, desde los rentistas financieros hacia los trabajadores activos y pasivos. Este cambio radical en la política fiscal puede facilitar los recursos necesarios en una primera fase para iniciar el vasto programa de relanzamiento económico y mejora de la calidad de vida que se precisa.

Evidentemente, una política con estas características requiere un cambio radical en la correlación de fuerzas entre capital y trabajo. Solamente sumando al conjunto de los trabajadores de los países de la periferia sur de Europa puede ser posible llevar a cabo el cambio necesario. Pero a pesar de lo dificultoso de un cambio de coyuntura política como el señalado, este es solo el primer paso. Un programa de desarrollo autocentrado en la periferia sur de Europa tiene que resolver a medio plazo lo que intentó y fracasó el mercado único. Actualmente, el desarrollo de las fuerzas productivas y la internacionalización de los sistemas productivos ha alcanzado un grado tal que es muy difícil que un grupo de países que representan el 25% de la población de la UE, pero solamente el 1,9% de la población mundial, pueda modificar con éxito su inserción en la división internacional del trabajo, si no integra en su modelo de acumulación post-capitalista a otros espacios sociales y productivos.

Por lo tanto resulta imprescindible para la viabilidad de una moneda nueva y una política orientada en favor de los trabajadores, contar con un espacio productivo

en el cual se pueda establecer una nueva división del trabajo basada en los principios de desarrollo social colectivo y bienestar para el conjunto de la población del área monetaria. Por eso, en una segunda etapa, tras su implantación en la periferia de la Eurozona, la nueva moneda, y las nuevas condiciones de desarrollo social y económico tienen que ser una propuesta de integración dirigida hacia las otras periferias inmediatas del capital europeo: la periferia del este de Europa y la del África mediterránea.

Los países del este de Europa han sido transformados por las multinacionales europeas en el taller industrial de bajo coste que precisa la industria del automóvil y de bienes de equipo para permanecer competitiva a escala mundial. De modo que una parte del tejido industrial de la Europa mediterránea se ha desplazado a los nuevos integrantes de la UE en el centro y este de Europa.⁴ Pero aun así, hay un grave excedente de mano de obra que el capitalismo europeo es incapaz de aprovechar de forma productiva.

La moneda común, asociada a una política de pleno empleo y mejora sostenida del bienestar, puede ser una alternativa para países que, vista la experiencia de la periferia euro-mediterránea, quieran escapar de la trampa que supone el euro para países con una base productiva dependiente y menos sofisticada tecnológicamente, que acabarán sometidos a la importación masiva de productos procedentes de los países más avanzados del centro y norte de la Eurozona.

El África del mediterráneo se está convirtiendo en reserva energética, turística y suministradora de productos agrícolas y manufacturados ligeros para la Unión Europea. La integración con los países del mediterráneo norte y del este de Europa en un espacio monetario y financiero común, puede convertirse en una oportunidad para superar el marasmo político e ideológico en que se encuentran los países del Magreb y del Makrech, a consecuencia del fracaso del modelo desarrollista en los años ochenta, y el posterior auge del fundamentalismo islámico.

En su conjunto, el Mediterráneo y el este de Europa agrupa un conjunto de territorios con un elevado grado de simetría productiva, países en los cuales la

⁴ Este tema se encuentra desarrollado en J. Arriola y L. Vasapollo: *La dolce maschera dell'Europa. Per una critica delle politiche economiche neoliberaliste*. Jaca Book, Milán, 2004.

política monetaria y fiscal encuentra una confluencia de intereses, facilitando la puesta en marcha de políticas basadas en el pleno empleo de los recursos productivos y de mejora gradual de las condiciones de vida. La polarización productiva y los intereses contradictorios que caracterizan a la Eurozona sería sustituida por un espacio de desarrollo postcapitalista, que supondría un modelo alternativo a largo plazo también para otros países de la periferia europea como Irlanda, donde se expresa actualmente el agotamiento del modelo de acumulación basado en la desfiscalización de las rentas del capital y la implantación de sedes de multinacionales norteamericanas y japonesas, o incluso para países del centro europeo, como Bélgica o Gran Bretaña, cuya inserción en la división europea del trabajo es cada vez más problemática.